

Lic. José María Iglesias, Ministro de Justicia é Instrucción pública.

Y lo comunico á vd. para su inteligencia y fines consiguientes.

Independencia y libertad. México, Noviembre 20 de 1869.—*Iglesias*.—Ciudadano.....

SECRETARIA DE ESTADO Y DEL DESPACHO
DE GOBERNACION.

Sección 1ª

El ciudadano presidente de la República se ha servido dirigirme el decreto que sigue:

BENITO JUAREZ, presidente constitucional de los Estados-Unidos mexicanos, á sus habitantes, sabed:

Que el congreso de la Union ha tenido á bien decretar lo que sigue:

El congreso de la Union decreta:

Art. 1º La República mexicana honra la memoria del ilustre C. Francisco Zarco, declarando que mereció bien de la patria.

Art. 2º Se inscribirá su nombre en el salon de sesiones del congreso de la Union.

Art. 3º Se autoriza al Ejecutivo para que ministre á la viuda é hijos del citado C. Francisco Zarco, la cantidad de treinta mil pesos, tomándolos de los productos de bienes nacionalizados y de los rezagos de contribuciones directas. En caso de no reunirse esa suma dentro de cuatro meses, se pagará de los fondos comunes del erario federal.

Art. 4º Los hijos del C. Zarco tienen derecho á ser educados gratuitamente en los colegios nacionales.

Salon de sesiones del congreso de la Union. México, Diciembre 24 de 1869.—*Francisco Menocal*, diputado vicepresidente.—*F. D. Macin*, diputado secretario.—*Julio Zárate*, diputado secretario.

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. Palacio del gobierno nacional en México, á veinticuatro de Diciembre de mil ochocientos sesenta y nueve.—*Benito Juárez*.—Al C. Lic. Manuel Saavedra, ministro de gobernación.

Y lo comunico á vd. para su inteligencia.

Independencia y libertad. México, Diciembre 24 de 1869.—*Saavedra*.

SECRETARIA DE ESTADO Y DEL DESPACHO
DE GOBERNACION.

Sección 1ª

El ciudadano presidente de la República se ha servido dirigirme el decreto que sigue:

BENITO JUAREZ, Presidente constitucional de los Estados-Unidos mexicanos, á sus habitantes, sabed:

Que el congreso de la Union ha tenido á bien decretar lo que sigue:

El congreso de la Union decreta:

Artículo único. Se declara benemérito de la patria al C. Ignacio de la Llave. Su nombre se inscribirá con letras de oro en el salon de sesiones del congreso de la Union.

Salon de sesiones del congreso de la Union. México, Diciembre 24 de 1869.—*Francisco Menocal*, diputado vicepresidente.—*F. D. Macin*, diputado secretario.—*Julio Zárate*, diputado secretario.

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. Palacio del gobierno nacional en México, á veinticuatro de Diciembre de mil ochocientos sesenta y nueve.—*Benito Juárez*.—Al C. Lic. Manuel Saavedra, ministro de gobernación.

Y lo comunico á vd. para su inteligencia.

Independencia y libertad. México, Diciembre 24 de 1869.—*Saavedra*.

SECCION SUPLEMENTARIA

ESPERAS.

Guanajuato, Diciembre 15 de 1870.

Señores Redactores de "El Derecho."

MEXICO.

MUY SEÑORES MIOS:

En los números 7 y 11 del tom 5.º de la acreditada publicacion de vdes., correspondientes á los dias 13 de Agosto y 10 de Setiembre del corriente año, he visto inserto el discurso pronunciado por el Sr. Gonzalez Torres, en la Legislatura de Guanajuato, combatiendo el dictámen que presentó la comision de mi cargo en contra de la iniciativa de dicho señor, en que proponia la reforma de los artículos 435, 436, 446, 447, 448, 451 y 1298 de la ley sobre administracion de justicia del Estado, de 5 de Mayo de 1867; y como para una perfecta instruccion es conveniente que se conozcan los fundamentos en que ese dictámen descansa, suplico á vdes. den á luz los adjuntos documentos; favor que les estimará mucho su afectísimo obediente servidor Q. B. SS. MM.

Andrés Tovar.

SEÑOR:

El proyecto de reformas á algunos artículos de la ley de 5 de Mayo de 1867, presentado por el C. Diputado Gonzalez Torres y que ha pasado á esta comision para abrir dictámen, entraña cuestiones tan delicadas y trascendentales, que el que suscribe teme no poder tocarlas en toda su extension, ni menos resolverlas de una manera satisfactoria, porque no se trata de un punto de mero derecho comun, que esta Asamblea pudiera ordenar por solo los principios de conveniencia social, sino que él se enlaza con el derecho constitucional de la República, que V. S. debe tener siempre á la vista, y que no podria contrariar sin extralimitar sus propias facultades.

El derecho de propiedad, consagrado por la Constitucion general como una de las garantías

individuales, es el que pueda tocarse en las cuestiones de que debe ocuparse la comision. Los preceptos de aquel Código son terminantes: «La propiedad de las personas, dice el art. 27, no puede ser ocupada sin su consentimiento, sino por causa de utilidad pública y previa indemnizacion. La ley determinará la autoridad que deba hacer la expropiacion, y los requisitos con que esta haya de verificarse.»

El art. 126 establece: «Esta Constitucion, las leyes del Congreso de la Union que emanen de ella, y todos los tratados hechos ó que se hicieren por el Presidente de la República, con aprobacion del Congreso, serán la ley suprema de toda la Union. Los jueces de cada Estado se arreglarán á dicha Constitucion, leyes y tratados, á pesar de las disposiciones en contrario que

pueda haber en las Constituciones ó leyes de los Estados.»

Hé aquí los grandes principios que la comision ha creído necesario tener á la vista: la observancia de los preceptos constitucionales, que no le sería lícito herir sin imprimir el sello de la nulidad á sus propios actos, y el de la inviolabilidad de la propiedad particular, que es el que afectan los puntos de reforma propuestos. Si ellos pueden limitar ú ofender este derecho, es lo que se propone examinar la comision.

Para determinar la extensión que á aquel deba darse, preciso es recurrir á los principios del derecho comun, confrontándolos con las disposiciones del público constitucional.

La propiedad, segun el derecho comun, la constituyen todas las cosas que el hombre adquiere, que pueden serle de algun provecho ó utilidad, y que puede guardar y defender con exclusion de los demás. El derecho de propiedad es la facultad de usar de las cosas que le pertenecen, de la manera que quiera.

A estas nociones de la propiedad se refieren las disposiciones constitucionales que nos han regido en distintas épocas, desde nuestra emancipacion política, como será fácil recordar.

La primer carta constitucional que tuvo el país, la Constitucion de 4 de Octubre de 1824, consagró en su artículo 111, fraccion 3ª, el principio de la inviolabilidad de las propiedades en los términos siguientes: «El Presidente no podrá ocupar la propiedad de ningun particular ni corporacion, ni turbarle en la posesion, uso ó aprovechamiento de ella; y si en algun caso fuere necesario para un objeto de conocida utilidad general, tomar la propiedad de un particular ó corporacion, no lo podrá hacer sin prévia aprobacion del Senado, y en sus recesos, del Consejo de Gobierno, indemnizando siempre á la parte interesada, á juicio de hombres buenos, elegidos por ella y por el Gobierno.»

La ley de 15 de Diciembre de 1835, en el artículo 2.º señaló, como tercer derecho del hombre: «No poder ser privado de su propiedad, ni del libre uso ni aprovechamiento de ella, en todo ni en parte.»

En las nuevas leyes constitucionales que se publicaron y sancionaron en 30 de Diciembre de 1836, se reprodujo íntegro el artículo anterior en el párrafo 3.º del artículo 2.º

Las leyes dictadas en 1843, con el nombre de «Bases de organizacion política de la República Mexicana,» establecieron en el artículo 9.º fraccion 13: «La propiedad es inviolable, sea que pertenezca á particulares ó á corporaciones, y ninguno puede ser privado, ni turbado en el libre uso y aprovechamiento de la que le corresponda segun las leyes, ya consista en cosas, acciones ó derechos, ó en el ejercicio de una profesion ó industria que le hubiese garantizado la ley. Cuando algun objeto de utilidad pública exigiere su ocupacion, esta se hará, prévia la

competente indemnizacion, en el modo que disponga la ley.»

En el Estatuto orgánico de la República, expedido el 23 de Mayo de 1856, como consecuencia del plan político proclamado en Ayutla, se consigna en uno de sus artículos: «La propiedad es inviolable, sea que consista en bienes, derechos, ó en el ejercicio de alguna profesion ó industria.»

En todos los artículos que quedan trascritos se descubre el pensamiento dominante de nuestros legisladores sobre el derecho de propiedad, y en él se encierran los siguientes conceptos: «La propiedad es inviolable.

La propiedad se considera, no solo en las cosas, sino en los derechos y en las acciones.

La inviolabilidad no solo excluye la expropiacion, sino todo acto que turbe ó impida el uso libre y aprovechamiento de la propiedad.

La garantia otorgada por la ley tiene por único limite la utilidad pública ó general, suficientemente calificada y con la justa indemnizacion.»

La Carta de 1857, que ha consagrado los principios mas liberales y altamente sociales, no podia haber desconocido los relativos á la propiedad, y ántes bien, les ha dado toda su amplitud, colocándolos entre las primeras y mas respetables garantías del hombre.—Es, pues, la propiedad bajo los conceptos que quedan expresados, la que garantiza este Código.

Establecida así la inteligencia que deba darse al artículo 27 constitucional, tiempo es de examinar si las reformas propuestas pueden conciliarse con estos principios, ó si, por el contrario, pugnan de alguna manera con ellos.

Tales reformas pueden concretarse en estos términos: «La mayoría de acreedores decide sobre admision de la cesion de bienes hecha por un deudor comun y sobre la concesion de esperas ó quitas que este solicite.»

Para calificar la constitucionalidad ó inconstitucionalidad de estas proposiciones, es preciso examinar las limitaciones ó modificaciones que ellas importen en los derechos individuales de cada acreedor, y para apreciarlas, se necesita considerar separadamente las distintas clases de concurso á que se refieren y los efectos que en ellos produce el acuerdo de la mayoría.

La reforma sobre los artículos 435 y 436 mira al concurso voluntario ó cesion de bienes, y los efectos de esta son conforme al derecho comun:

1.º Que el deudor no puede ser preso por sus deudas.

2.º Que goce del beneficio de competencia; es decir, que no quede obligado á pagar con lo que adquiriera despues de la cesion, sino reservándose lo necesario para su subsistencia.

3.º Que mientras se ventila la cesion, no pueda ser reconvenido por ninguno de sus acreedores.

4.º Que todos estos están obligados á deducir sus derechos en el concurso, ó, lo que es lo mismo, se forma un juicio atractivo.

5.º Que en este concurso no se admite décima y se admite puja.

Sobre el primero de los efectos mencionados, es de notar que en el día no viene á ser ya una concesion ó privilegio especial, encontrándose determinado desde nuestras primeras leyes constitucionales y confirmado por el artículo 17 del Código de 1857, que nadie pueda ser preso por deudas de un carácter puramente civil.

Respecto del segundo, desde luego se observa que hay una limitacion al derecho de los acreedores, puesto que cada uno en particular lo habria tenido para exigir su crédito; y si los bienes del deudor no alcanzaran á cubrir, lo tendria para repetir contra él, siempre que adquiriera otros, sin esa condicion obligatoria de la ley, á que se da el nombre de beneficio de competencia. En este caso, el acuerdo de la mayoría sujetaria á la minoria á hacer un sacrificio de su propio derecho.

El tercer efecto descansa en un principio de órden público, que consiste en no multiplicar cuestiones judiciales, cuando por un solo juicio pueden alcanzarse todos los acreedores su derecho.

Otro tanto puede asentarse respecto del cuarto; pues no se hace mas que reducir á un solo juicio los varios que haya pendientes; y si bien alguno de los acreedores podrá sufrir molestia en esto, la molestia no es el sacrificio de su derecho. Por otra parte: la necesidad de calificar la preferencia que unos acreedores pretenden tener sobre otros, hace indispensable que sus acciones se discutan en un solo juicio.

El quinto no tiene ya aplicacion en cuanto á la décima, porque en ningun juicio se causa; y en cuanto á la puja, favorecería mas bien que perjudicaría al interés de los acreedores.

Resulta de estas observaciones, que la cesion de bienes perjudica el derecho de los acreedores, si se le concede el segundo efecto que queda señalado; y por consecuencia, que el consentimiento de la mayoría impone á la minoria un sacrificio de su propio derecho contra su voluntad.

La modificacion propuesta de los artículos de la ley sería admisible, si á la vez se señalaran como únicos efectos de la cesion, formar un solo juicio, en el que todos los acreedores pudieran hacer valer los derechos que á cada uno asisten separadamente, sujetando solo á la decision de la mayoría aquellos puntos que pueden llamarse de sustanciacion, como la administracion del concurso, el nombramiento de síndico judicial, etc.

Pasemos al punto relativo á esperas.

Para apreciar en su verdadero valor las reformas que se proponen en esta parte, es preciso tener presente que cada uno de los acreedores que forman el concurso representa un

derecho que ha adquirido separadamente y con entera independencia de los demás: que ese derecho, ó esa accion, forma parte ó el todo de su propiedad: que la ley le garantiza ese derecho en términos que pueda exigir por las vías judiciales el cumplimiento de las obligaciones legítimamente contraídas, sin que esté obligado á conceder mas término que el estipulado, si no es que por su sola voluntad se preste á hacerlo.

Este es el derecho que tiene cada acreedor separadamente y que no cambia de naturaleza porque haya varios que lo posean ó que lo hagan valer á la vez.

Si, pues, la mayoría pudiera conceder una espera que la minoria resiste, es fuera de duda que esta sufriría una violencia en sus propios derechos; violencia que pugna con la garantía constitucional, por cuanto ella impide el uso libre y aprovechamiento de la propiedad.

Viendo la cuestion en el terreno práctico, se percibirá mejor la injusticia de esta violencia.

No haremos mérito del caso que no sería extraño, y del que podrían citarse algunos ejemplos, del caso, repetimos, en que con créditos supuestos se forme una mayoría que imponga la ley á la minoria; y no haremos mérito de él, porque en cuestiones de derecho no se debe argüir con los abusos; pero si es de considerarse el caso más natural y más frecuente. La mayoría de los acreedores tiene los fondos necesarios para que no le hagan falta los créditos que representa en el concurso, puesto que se presta á conceder las esperas; mientras que alguno de los que forman la minoria no cuenta acaso más que con la deuda que reclama, y cuyo pago, aunque no se le hiciera íntegro, sería preferible de presente, á grandes ventajas que pudiera esperar con el tiempo.

La preferencia por la mayoría, daría por resultado el mejor derecho de los acreedores más acomodados, de aquellos á quienes los créditos no hicieran falta. Y esto contra la igualdad ante la ley, contra la fuerza de las obligaciones legítimamente contraídas.

Pero sin atender á estos resultados y sin ver la cuestion en el terreno de la justicia, se puede considerar bajo otro aspecto. La mayoría de los acreedores ve la conveniencia de sus intereses en la espera, ó tiene voluntad de hacer un servicio al deudor comun: la minoria quiere prescindir de su conveniencia y no tiene voluntad de prestar ese servicio: ¿podrá obligársele?

Hemos asentado ántes, como preliminar de estas cuestiones, que la garantía constitucional se extiende al uso libre que el hombre haga de su propiedad, en la que se cuentan los derechos y las acciones. El acreedor tiene, pues, esa libertad de perder su crédito y de hacer ó no un servicio á que no está obligado por razon del contrato.

Los argumentos expuestos tienen mayor fuerza con respecto á las quitas. En las esperas so-

lo se trata de diferir el cumplimiento de una obligación contraída: en las quitas se trata ya de sacrificar una parte del crédito que representa cada acreedor, ó, lo que es lo mismo, de perder una parte de su propiedad. Si la Constitución garantiza de una manera absoluta la propiedad de las personas, la garantiza evidentemente en todo y en parte; y si entre los preceptos constitucionales que se han trascrito se expresa terminantemente que no se puede privar á ninguno de su propiedad ni en todo ni en parte (Ley de 35), no cabe duda en que el sacrificio que se obliga á hacer á la minoría con la quita, pugna con esta garantía.

Podrá suceder que el deudor se encuentre en la imposibilidad de cubrir sus créditos íntegros, y que por esto se tenga que perdonarle parte. Si tal es la situación del deudor, la quita vendrá de la necesidad misma de los casos, mas no del acuerdo de la mayoría. La conclusión anterior no varía en este caso, porque no es á la que se refiere la cuestión.

La comisión no creería llenar su encargo, si no tomara en consideración las razones en que el C. Gonzalez Torres ha fundado su proyecto, y son de las que pasa á ocuparse.

El proponente ha dicho: que los artículos de la ley, tales como existen, envuelven el gran absurdo de sujetar á las determinaciones de una minoría, de una individualidad, los intereses comunes.

La Comisión cree que el autor del proyecto no ha de haber tenido la conciencia de lo que expresa la frase; porque no es posible que puedan confundirse dos conceptos enteramente distintos. Que la minoría no pueda ser arrastrada por la mayoría, no significa más sino que todos los acreedores tienen igual independencia en el ejercicio de sus derechos, sea cual fuere el número de aquellos y la importancia de estos; pero nunca podría entenderse que la minoría sujete en sus resoluciones á la mayoría. La comisión no ve en esto sino la igualdad ante la ley, que lejos de ser un absurdo, es una garantía constitucional. La minoría podrá ser un obstáculo para que se haga un arreglo general en un concurso, pero no puede ni tiene derecho á serlo para que la mayoría celebre el convenio que estime oportuno con sus propios créditos.

La manera de conciliar ambos intereses ó de eliminar á la minoría, no es materia que debe determinar la ley, cuando los acreedores son los mejores jueces de sus propios bienes y derechos.

El proponente cree ser aplicables á los casos de concurso los principios que rigen en la computación del sufragio popular y en los negocios de una comunión de individuos. La comisión, comprendiendo toda la fuerza de este argumento, debe entrar al examen de la cuestión.

El artículo constitucional que tantas veces se ha citado no pone mas limitación al derecho

de propiedad que la utilidad pública y *previa indemnización*. Si el caso de un concurso se considera de interés común comprendido en el artículo mencionado, cabrá sin duda la preponderancia del voto de la mayoría; pero aquella tendrá que indemnizar previamente á esta el perjuicio que pueda resentir con su acuerdo.

En este sentido, la comisión no pulsaría inconveniente en admitir las reformas propuestas.

Pero no es exacto que se trate de utilidad pública, ni de interés de una comunidad. Los acreedores tienen acciones independientes entre sí; tienen cada uno un interés individual, que no cambia de naturaleza porque se reúnan varios en sus reclamaciones. Si hay muchos que tengan igual interés, solo puede verse en esto el interés de muchos, pero no el de una comunión que no existe, ni menos el interés público, que es general, indeterminado, que no se concreta á ciertas personas, ni á tiempo fijo, sino que se extiende á todas las generaciones, á todos los individuos, á todas las edades.

En cuanto á la computación del sufragio popular, á primera vista se percibe que en este debe preponderar el voto de la mayoría, porque se trata de la generalidad de los individuos de una nación, ligados por el pacto social; y que por la necesidad de la Constitución misma, debe prevalecer el voto del mayor número. De otra manera, sería imposible todo sistema popular.

Pero en el caso en cuestión, solo se tienen derechos individuales, en los que los acreedores no están ligados por ningún pacto.

El proponente añade: que desde que la ley está vigente no ha habido un solo caso de concurso que termine por un arreglo.

La comisión no cree de su deber entrar en una cuestión de hecho, sino examinar los principios; y si el hecho es cierto, la comisión considera como un triunfo legal la observancia de la Constitución.

Las razones asentadas persuaden al que suscribe de que las reformas propuestas por el ciudadano diputado Gonzalez Torres no son admisibles, por contrariar un principio constitucional; y lleva su convicción mas adelante: cree que si se hicieran tales como se proponen, no surtirían efecto alguno, porque cabría el recurso de amparo que las nulificaría.

Por tales consideraciones, la comisión sujeta á la ilustrada deliberación de la Cámara la siguiente proposición:

Unica. No son de admitirse las reformas á los artículos 435, 436, 446, 447, 448, 451 y 1298 de la ley de 5 de Mayo de 1867 en los términos que propone el C. diputado Manuel Gonzalez Torres.

Sala de Comisiones del H. Congreso. Guajuato, Abril 4 de 1870.—A. Tovar.

Se aprobó este dictámen en la sesión del 30 de Abril de 1870.

SEÑOR:

El erudito y bien trabajado discurso que ha pronunciado el C. Gonzalez Torres,* impugnando la proposición que está al debate, encierra argumentos que á primera vista deslumbran, pero que se desvanecen completamente, si se examinan con calma y á la luz de la razón y de los principios. Algunos de esos argumentos se han hecho valer por el C. Gonzalez Torres en la parte expositiva de su proyecto de reforma, y han sido ya contestados en el dictámen cuya proposición se discute. Así es, que solo los tocaré ligeramente, para no incurrir en repeticiones que fatigarían la atención de la Cámara, ocupándome con más detención de los que nuevamente se aducen.

La propiedad, según el derecho común, la constituyen todas las cosas que el hombre adquiere, que pueden serle de algún provecho ó utilidad y que puede guardar y defender con exclusión de los demás. El derecho de propiedad es la facultad de usar de las cosas que le pertenecen de la manera que quiera. Así he definido la propiedad en mi dictámen, y el C. Gonzalez Torres califica de grande absurdo esta definición. En verdad que sorprende tal aseveración en boca de una persona que tan versada se manifiesta en el derecho romano y en el civil patrio. La definición de que se trata no es una arbitraria invención mía, es la misma que se ve consignada en las sabias legislaciones romana y de las Partidas.

Justiniano, en su Instituta 24 párrf. 4º, define la propiedad: *plenam in re potestatem*; es decir, poder, dominio amplio, absoluto en los bienes. Esta definición fué aceptada por el rey D. Alfonso el Sabio, quien la consignó en la ley 1º, tit. 28, Part. 3º, aunque sin la adición que á dicha ley se ha permitido hacer el C. Gonzalez Torres. Esta dice así: «Señorío es poder que ome ha en su cosa de hacer della ó en ella lo que quisiere según Dios, ó según fuero.»

Los autores todos, siguiendo el mismo principio, han definido y explicado la propiedad. Mazeroll dice: «La propiedad es el derecho real que tiene sobre la cosa propia, *res singulorum*, el hombre, que por esto toma el nombre de propietario. Este derecho somete esta cosa á su dominación tan completamente, que por regla general depende enteramente de la voluntad del propietario, y partiendo de este principio, está autorizado á disponer de ella de todas maneras. En consecuencia, la propiedad es también calificada por excelencia como el *derecho de la dominación sobre una cosa, dominium*, y el propietario como el *dominus*, es decir, el amo, el dueño, el señor de la cosa.»

* Números 7 y 11, tomo V de "El Derecho."

Ortolan, en su obra intitulada: «Explicación á la Instituta de Justiniano,» lib. 2º, tit. 1º, se expresa en estos términos: «El dominio da sobre la cosa un pleno poder; *plenam in re potestatem*. Se trata de analizar los elementos que componen este poder; poder de ocupar la cosa, de obtener de ella todos los servicios de que sea capaz, todos los productos, periódicos ó no, todas las creces y aumentos; poder de modificarla, de dividirla, de enajenarla, aun de destruirla, salvas las restricciones legales; y en fin, de reivindicarla de manos de terceros: todo esto se halla comprendido en el dominio. Los principales de estos diferentes derechos, aquellos á quienes pueden referirse la mayor parte de los demás, son los siguientes: *jus utendi*, es decir, el derecho de hacer de la cosa todo el uso que sea posible, y de obtener de ella todos los servicios de que sea capaz; *jus fruendi*, el derecho de percibir, no todos los productos y creces, sino todos los frutos que produce; *jus abutendi*, el derecho de disponer de ella, ya enajenándola, ó ya aun destruyéndola; por último el derecho, que viene á ser una sanción de todos los demás, de reivindicarla de manos de cualquier detentador. Así, el propietario de una casa puede habitarla, *jus utendi*; alquilarla y percibir sus rentas, *jus fruendi*; venderla, hacer donación de ella, *demolenda, jus abutendi*; reclamarla en justicia de cualquiera detentador, *jus vindicandi*.»

Se ve, por las leyes y doctrinas citadas, que la definición que he dado de la propiedad, no es caprichosa y arbitraria, que no envuelve ese grande absurdo de que habla el C. Gonzalez Torres, sino que es enteramente exacta y aceptada en todos los tiempos y por todas las legislaciones. El hombre, pues, tiene el derecho de disponer de sus bienes de la manera que más le acomode, pudiendo hasta destruirlos, sin que nadie tenga derecho á oponerse á ello, salvo que ataque el derecho de tercero. Por esto vemos que el propietario puede demoler su casa, sin que la autoridad ni los particulares tengan derecho de impedirselo; y por esto también se ha consignado ya de una manera clara, precisa y terminante en los códigos penales modernos, que el incendio de bienes propios solo es punible cuando afecta derecho de tercero, ó pone en peligro el orden público ó el interés común. Siendo esto así, y estando prescrito por el artículo 27 de la Constitución federal, que: «La propiedad de las personas no puede ser ocupada sin su consentimiento, sino por causa de utilidad pública y previa indemnización,» es inconcuso que cualquier acto que restrinja, disminuya ó menoscabe la propiedad particular, importa un atentado, la violación de un derecho, el ataque de una garantía constitucional. Y esto sucedería precisamente si se aceptaran las reformas que propone el C. Gonzalez Torres; porque, ¿con qué título, con qué derecho unos acreedores han de disponer á su voluntad del